

Re: Contestación Demanda Proceso # 2.021 - 00176 - 00 - Demandante Erley Ortega Caicedo y Otros Vs Palmeiras Colombia S.A.S.

diego luis arteaga <laoguerra2@yahoo.com>

Lun 17/01/2022 4:23 PM

Para: Juzgado 01 Laboral Circuito - Nariño - San Andrés De Tumaco <j01lctotum@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Jecorredor <jecorredor@thinoil.com>; Carlos Alberto Corredor <ccorredor@thinoil.com>; Ninfa Castañeda <ncastaneda@palmeirascolombia.com>; Javier Arévalo <jarevalo@palmeirascolombia.com>; Palmeiras Colombia S.A. <repcion@palmeirascolombia.com>; Secretaría Asjurisdao <secretariaasjurisdao@gmail.com>

El lunes, 17 de enero de 2022 04:01:41 p. m. GMT-5, diego luis arteaga <laoguerra2@yahoo.com> escribió:

San Andrés de Tumaco, 17 de enero del 2.022

Señor
Juez Laboral del Circuito de Tumaco
E. S. D.

Referencia: Proceso Ordinario Laboral nro. 5283531050012021 – 00176 - 00, demandante ERLEY ORTEGA CAICEDO y Otros Vs PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S.

En archivo PDF, remito en tiempo la contestación de la demanda dentro del asunto de la referencia.

Por favor confirmar recibido.

Con respeto,

Diego Arteaga Ortíz
Apoderado Judicial
Demandada

----- Mensaje reenviado -----

De: PALMEIRAS COLOMBIA S.A. <repcion@palmeirascolombia.com>

Para: Diego Luis Arteaga <laoguerra2@yahoo.com>; NINFA CASTAÑEDA
<ncastaneda@palmeirascolombia.com>

Enviado: lunes, 6 de diciembre de 2021 05:40:27 p. m. GMT-5

Asunto: RV: NOTIFICACION DEMANDA 2021-00176 - JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE TUMACO

Cordialmente

María Eugenia Hernández

Recepción

6617682 – Ext. 101

Nit. 900259413



De: Juzgado 01 Laboral Circuito - Nariño - San Andrés De Tumaco
[mailto:j01lctotum@cendoj.ramajudicial.gov.co]

Enviado el: lunes, 6 de diciembre de 2021 17:12

Para: palmeiras@palmeirascolombia.com

CC: firmaxios@gmail.com

Asunto: NOTIFICACION DEMANDA 2021-00176 - JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE TUMACO

Tumaco, 6 de diciembre de 2021.

Oficio N°. 1558

Señores

PALMEIRAS COLOMBIA S.A.

Gerente y/o representante legal

Ciudad

E-Mail: palmeiras@palmeirascolombia.com

Demandante: **ERLEY ORTEGA CAICEDO Y OTROS**

Demandado: **PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S.**

Radicación: **Ordinario P.I. No. 5283531050012021-00176-00**

Fecha de la providencia que admitió la demanda: noviembre 12 de 2021.

Comendidamente me permito **NOTIFICARLE** el auto N°. 2021-1329, por medio del cual se admitió la demanda Ordinaria Laboral de la referencia que cursa en su contra, informándole que de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020, **la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío de la presente comunicación**, y que los términos legales empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.

Se le recuerda que el término para contestar la demanda es de diez (10) días hábiles y que deberá hacerlo a través de apoderado judicial, enviando la contestación y anexos correspondientes al correo electrónico j01lctotum@cendoj.ramajudicial.gov.co, lo cual se hará desde el correo electrónico que haya inscrito su apoderado judicial en el Registro Nacional de Abogados.

Se anexa copia de la demanda y del auto admisorio de aquella.

Atentamente,



NANCY ELENA QUIÑONES CASTILLO

Secretaria

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

Link Google Drive

https://drive.google.com/file/d/1T0zCncD1QmNHUCnBABPx3j_hgINu_CAw/view?usp=sharing

Señor
Juez Laboral del Circuito de Tumaco
E. S. D.

Referencia: Proceso Laboral Ordinario de Primera Instancia, radicación nro. 5283531050012021 – 00176 - 00, demandante ERLEY ORTEGA CAICEDO Y OTROS contra PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S.

DIEGO LUIS ARTEAGA ORTIZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía nro. 79.384.925 de Bogotá D.C., tarjeta profesional nro. 63.306 del Consejo Superior de la Judicatura, domicilio y residencia laboral en la Avenida de Los Estudiantes, Centro Comercial "Miramar", oficina 206, celular 315 580 3607 de Tumaco – Nariño, correo electrónico laoguerra2@yahoo.com, en mi calidad de apoderado judicial de la parte demandada, empresa PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S., con NIT: 900.259.413 - 6, sociedad comercial legalmente constituida, tal y como se demuestra con el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Cali, documentos que obran en el expediente, por medio del presente escrito me dirijo a usted en forma respetuosa, a fin de manifestarle que en tiempo ***procedo a contestar la demanda*** formulada por el señor ERLEY ORTEGA CAICEDO y otros, a través de apoderado judicial, de la siguiente manera:

A LOS HECHOS

Al Primero: Es cierto y aclaro. Se deduce del registro civil de matrimonio aportado con la demanda.

Al Segundo: Es cierto.

Al Tercero: Es cierto y aclaro. Se deduce de los registros civiles de nacimientos aportados con la demanda.

Al Cuarto: No me consta y aclaro. Para PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S., esta circunstancia escapa de su esfera de conocimiento, por no ser parte del núcleo familiar. Que pruebe todo lo narrado.

Al Quinto: Es cierto y aclaro. Es de precisar que el tipo de contrato con el cual se vinculó la señora ERMENCIA URBANO ORTEGA, a la empresa PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S., es de los denominados a Término Fijo Inferior a Un Año de Cuatro (4) Meses, con fecha de inicio once (11) de julio del dos mil dieciocho (2.018), tal y como se puede apreciar en las pruebas anexas a la demanda, folios diecisiete (17) al veintiuno (21).

Al Sexto: Es cierto y preciso. El contrato a Término Fijo Inferior a Un Año de Cuatro (4) Meses, con fecha de inicio once (11) de julio del dos mil dieciocho (2.018) y culminación treinta (30) de julio del dos mil diecinueve (2.019), teniendo como base el artículo 46 del Código sustantivo del Trabajo, sufrió las siguientes prórrogas:

- 1) Del once (11) de noviembre del dos mil dieciocho (2.018) al diez (10) de marzo del dos mil diecinueve (2.019), primera con término igual a la inicial.
- 2) Del once (11) de marzo del dos mil diecinueve (2.019) al diez (10) de julio del dos mil diecinueve (2.019), segunda con término igual a la inicial.
- 3) Del once (11) de julio del dos mil diecinueve (2.019) al diez (10) de noviembre del dos mil diecinueve (2.019), tercera y última con término igual a la inicial; segmento en el cual ocurre, primero la desaparición de la trabajadora a partir del veintidós (22) de julio del dos mil diecinueve (2.019) y, finalmente, el hallazgo de sus restos mortales el treinta (30) de julio del mismo año.

Al Séptimo: Es cierto. Es de precisar que las funciones se pueden verificar en el primer folio del contrato a Término Fijo Inferior a Un Año de Cuatro (4) Meses, aportado como anexo a la demanda, folios diecisiete (17) al veintiuno (21).

Al Octavo: Es cierto y aclaro. La jornada de trabajo descrita era la máxima legal y por acuerdo expreso o tácito de las partes, se repartían las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1.990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 de la misma obra.

Al Noveno: Es cierto y preciso. La señora ERMENCIA URBANO ORTEGA, realizaba labores de campo en varios lotes de la finca Araki, propiedad de PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S., ubicada un poco antes del kilómetro 54 de la vía nacional Tumaco – Pasto.

Al Décimo: Parcialmente cierto y aclaro. La remuneración devengada por la trabajadora fue siempre el salario mínimo legal mensual vigente para cada año; como ingresó en el año dos mil dieciocho (2.018), su salario fue el informado por la parte demandante, pero al culminar su contrato el treinta (30) de julio del dos mil diecinueve (2.019), estaba devengando la suma de ochocientos veintiocho mil ciento dieciséis pesos moneda corriente (\$ 828.116 m/cte.), dato que se puede corroborar en la liquidación de las prestaciones sociales, folio treinta y cuatro (34) de los anexos de la demanda.

Al Décimo Primero: Es cierto.

Al Décimo Segundo: Parcialmente cierto y aclaro. Inicia en solitario las labores, pero en el curso de la mañana fue supervisada por la señora LILIANA SOTELO.

Al Décimo Tercero: Es cierto.

Al Décimo Cuarto: Es cierto y preciso. Tal y como se admite, es muy significativo anotar que el hijo de la trabajadora fallecida se encontraba

laborando en el lote vecino (el QA 14), sin que notara movimientos o cosas extrañas.

Al Décimo Quinto: Es cierto. Conforme con la información que se recaudó en la investigación de los hechos, de la inicial desaparición de la trabajadora ERMENCIA URBANO ORTEGA, su hijo aproximadamente a las 2:00 p.m. del veintidós (22) de julio del dos mil diecinueve (2.019), al ir a buscar a su madre, solo encuentra las herramientas de labor y nada más.

Al Décimo Sexto: Es cierto. Vale la pena anotar, inmediatamente se dispuso de un grupo de trabajadores en operativo de búsqueda de la trabajadora desaparecida hasta ese momento.

Al Décimo Séptimo: Parcialmente cierto y se aclara. Aproximadamente a las 3:30 p.m. del treinta (30) de julio del dos mil diecinueve (2.019), se informa al empleador el hallazgo del cuerpo sin vida de la trabajadora desaparecida, pero por lo avanzado del día y el lugar donde se lo encontró, las autoridades no pudieron ir a realizar las labores de levantamiento del cuerpo, sino hasta el día siguiente treinta y uno (31) de julio del dos mil diecinueve (2.019), a eso de las 9:15 a.m., cerca de una cascada ubicada en la vereda “El Paraíso”, en el Gualtal kilómetro 54 de la vía nacional Tumaco – Pasto, a media hora y fuera de la plantación de Araki, donde está el lote QA 15 de donde primeramente había desaparecido. Que pruebe lo no admitido.

Al Décimo Octavo: No me consta. Para PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S., esta circunstancia escapa de su esfera de conocimiento, por no ser parte del núcleo familiar. Que pruebe todo lo contado.

Al Décimo Noveno: No me consta. Para PALMEIRAS COLOMBIA S.A., esta circunstancia escapa de su esfera de conocimiento, por no ser parte del núcleo familiar. Que pruebe todo lo contado.

Al Vigésimo: No lo afirmo ni lo niego y aclaro. No es propiamente un hecho que trate sobre el asunto, es una circunstancia ajena al tema del proceso.

Al Vigésimo Primero: Falso en la forma narrada y aclaro. Es fundamental manifestar que la señora ERMENCIA URBANO ORTEGA, al ingresar a PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S., jamás informó estar amenazada o que su vida corría peligro por actividades como lideresa en el campo social o como activista de derechos humanos; tan así es la cosa, que ni su esposo y menos sus hijos, se explican la causa de su muerte en condiciones violentas, porque la definen como una persona noble, de buenos principios, que no se metía con nadie, de hecho, era evangélica y promulgaba la palabra de Dios; expresiones tomadas del informe de entrevista psicológica – grupal, realizada a los demandantes por el Psicólogo DARIO FERNANDO PAREDES VILLOTA, folios cincuenta (50) a cincuenta y dos (52), de los anexos de la demanda.

Igualmente, al ingresar a la empresa la señora ERMENCIA URBANO ORTEGA, recibió inducción sobre:

- 1) Temas varios como:
 - Información de la organización.

- Plan de comunicaciones.
 - Derechos y beneficios adquiridos.
 - Responsabilidades en el reglamento interno de trabajo.
 - Responsabilidades específicas en el cargo.
 - Protocolo en el manejo de búfalos.
 - Manejo adecuado del dispositivo CTR.
- 2) Temas en seguridad y salud en el trabajo como:
- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
 - Reglamento de higiene y seguridad industrial.
 - Política de seguridad y salud en el trabajo y seguridad integral.
 - Política de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas.
 - Política de seguridad vial y fluvial.
 - Política de protección contra caídas.
 - Acoso laboral.
 - Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.
 - Subprograma de medicina preventiva e higiene y seguridad industrial.
 - Matriz de identificación de peligros.
 - Reporte de accidentes, incidentes de trabajo y condiciones inseguras.
 - Elementos de protección personal.
 - Plan de emergencia.
 - Gestión ambiental.
 - Normas RSPO.

De lo anterior, existe la firma del recibo de la inducción por parte de la trabajadora en cada uno de estos temas, que son de implementación obligatoria para el empleador y que, en su desarrollo, cubren muchos aspectos del riesgo público, reclamados por los actores.

Por riesgo público podría tenerse en cuenta una definición muy general como “todo lo que ocurre en los espacios públicos, exterior a las empresas, y que afecta la salud de las personas” (González Mendigaña, 2.017).

Pero también podría adoptarse una definición como la del artículo 3º, numeral 15 del Decreto 4912 del 2.011 (por el cual se organiza el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección), en el que el riesgo es la “Probabilidad de ocurrencia de un daño al que se encuentra expuesta una persona, un grupo o una comunidad, como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón al ejercicio de su cargo, en unas condiciones determinadas de modo, tiempo y lugar”.

Como estos factores operan en el espacio público, el principal responsable de la protección de las personas es el Estado y lo que se hace desde la esfera organizacional o personal son acciones de prevención y autoprotección. El riesgo público está asociado a los factores derivados de circunstancias sociales, que generan situaciones de agresión intencional de personas contra personas y/o contra comunidades. Lo anterior se manifiesta en actos generalmente delictivos que afectan sus intereses y en los que se ven

involucrados trabajadores de manera directa o indirecta, generando en muchos casos lesiones temporales, permanentes e incluso la muerte.

Es muy probable que lo descrito en el párrafo anterior, fue lo que infortunadamente le pudo suceder a la trabajadora fallecida y, no se asegura, porque todavía los hechos son materia de investigación ante las autoridades competentes. Que pruebe todo lo narrado.

Al Vigésimo Segundo: Falso totalmente y aclaro. La finca Araki es de aproximadamente 243 hectáreas, no toda está cultivada de palma de aceite, que cuenta con seguridad privada en la portería; por el frente que da hacia la vía nacional Tumaco – Pasto, está totalmente cercada con mallas y alambres de púa, en la parte posterior el cercamiento en sus hitos es con árboles de la región, ya que no se puede hacer de otra forma por las servidumbres de tránsito de colonos y pequeños palmeros; cuenta con dos (2) supervisores, el de cosecha y polinización; la malla vial de acceso a los distintos lotes se encuentra en buen estado, siendo seguros para la movilidad y los terrenos de los lotes en su mayoría son llanos, con una que otra pequeña pendiente, pero que no representan mayores riesgos para los trabajadores. Otro dato que no es menor y que redundaría para la seguridad de la zona, es que a escasos cuatro (4) kilómetros se encuentra el Batallón de Selva # 53 Gualtal – Tumaco del Ejército Nacional.

Descrito lo anterior, se manifiesta que no les asiste razón a los demandantes cuando sostienen que no se cuenta con esquema de seguridad que garanticen la vida e integridad de los trabajadores, porque en PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S., empresa que tiene desarrollo en la región desde la década de los setenta, nunca antes se había presentado interna o externamente a la sede de la compañía, un infortunado suceso violento en contra de la vida de alguno de sus trabajadores, ni siquiera en las épocas de mayor incidencia de alteración del orden público por el narcotráfico y guerrilla en los fallidos procesos de paz del Caguan y en el del Gobierno Santos.

A PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S., como empleador, salvo las normas laborales, no se le puede exigir cumplimiento de obligaciones que se le deben reclamar al Estado colombiano. Que pruebe todo lo narrado.

Al Vigésimo Tercero: Falso en la forma narrada y aclaro. La parte demandante, con el afán de señalar responsabilidades en mi poderdante, ingresa a hacer aseveraciones de mala fe, sin el soporte probatorio y jurídico, porque no manifiesta la norma que haya declarado como zona roja el lugar donde se encuentra ubicada la finca de Araki. No hay que perder de vista, que la jurisdicción del municipio de Tumaco, es muy extensa, es uno de los más grandes del país y el más grande del Departamento de Nariño, dividido en zona de ríos, zona de carretera y zona de frontera, donde la finca de Araki se encuentra en la zona de carretera, que es mayoritariamente dedicada al cultivo de la palma de aceite. No se niega que, en los alrededores hacia la zona de ríos, ha habido alteración del orden público por incidencia de grupos armados ilegales, pero por ello no se puede irresponsablemente sentenciar que el lugar donde está la finca de Araki es catalogada zona roja, porque de ser así, diríamos que Colombia toda es zona roja por la inseguridad en la que vivimos.

La percepción de seguridad ciudadana en todo el país no es favorable. Además de eventos asociados con el conflicto armado, las comunidades denuncian incrementos en casos de delincuencia urbana, desplazamientos dentro de las mismas ciudades, ataques como resultados de extorsión y secuestros. Las regiones con mayor incidencia de eventos de violencia tienen fuerte presencia de grupos armados ilegales, son reconocidos centros de producción de drogas e incluso son territorios de los que se sabe hay abandono del Estado, elevados niveles de pobreza y territorios volátiles, que casualmente en la actualidad concentran la mayor parte de protestas sociales, tanto en ciudades como en zonas rurales. Que pruebe todo lo contado.

A LAS PRETENSIONES Y CONDENAS

Conforme a las respuestas entregadas para cada hecho expuesto por los demandantes, me opongo a todas y cada una de las pretensiones y condenas que persigue la parte actora, porque no le asiste la verdad y los derechos invocados, absolviéndose a mi mandante de los cargos; pero es necesario hacer precisión en la contradicción de algunas de ellas así:

HECHOS, FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO DE LA DEFENSA

Primero – Riesgo Público Fuera De La Órbita De Competencia Del Empleador: En primer lugar, debo precisar que toda actividad laboral está expuesta a un riesgo inherente y el accidente puede ocurrir por circunstancias propias de la actividad laboral y por causas ajenas al trabajador o al empleador.

Este tipo de riesgo laboral lo paga la ARL pues su papel precisamente es asegurar los riesgos propios de la actividad laboral, que ocurren por la propia naturaleza del trabajo desarrollado por el empleado.

Como lo alegado por los demandantes, es lo que se conoce como “Riesgo Público”, vale la pena sostener que en los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que deben implementar los empleadores, del cual el de PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S. no es la excepción, se tocan muchos aspectos de este tema (reglamento de higiene y seguridad industrial, política de seguridad y salud en el trabajo, seguridad vial y fluvial, política de protección contra caídas, acoso laboral), porque a la final todo riesgo laboral es público, más no todo riesgo público es laboral.

Por riesgo público podría tenerse en cuenta una definición muy general como “todo lo que ocurre en los espacios públicos, exterior a las empresas, y que afecta la salud de las personas” (González Mendigaña, 2.017).

También se podría adoptar la definición del artículo 3º, numeral 15 del Decreto 4912 del 2.011 (por el cual se organiza el Programa de Prevención y

Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección), en el que el riesgo es la "Probabilidad de ocurrencia de un daño al que se encuentra expuesta una persona, un grupo o una comunidad, como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón al ejercicio de su cargo, en unas condiciones determinadas de modo, tiempo y lugar".

La definición cultural más común sobre riesgo público que uno se encuentra, refiere todo lo que ocurre en los espacios públicos, exterior a las empresas y que afecte la salud de las personas.

Pero, esta es una definición muy ambigua que involucra una gran cantidad de factores no controlables y que complica los programas de salud ocupacional, a la hora de definir políticas y diseñar estrategias de prevención. Además, los factores reales de riesgo público se encuentran con mayor frecuencia y con más alta probabilidad dentro de las instalaciones de las empresas y obedecen al giro propio de sus procesos productivos.

Siendo la conducta humana la principal característica en este tipo de factores de riesgo, es necesario analizar la intencionalidad de las conductas cuyo propósito sea la de causar daño y/o generar lesiones y para eso se debe entrar en los terrenos de la criminalidad, la psicología delincinencial y otras disciplinas, que escapan al Derecho Laboral y la Seguridad Social.

Como estos factores operan en el espacio público, el principal responsable de la protección de las personas es el Estado y lo que se hace desde la esfera organizacional o personal son acciones de prevención y autoprotección. El riesgo público está asociado a los factores derivados de circunstancias sociales, que generan situaciones de agresión intencional de personas contra personas y/o contra comunidades. Lo anterior se manifiesta en actos generalmente delictivos que afectan sus intereses y en los que se ven involucrados trabajadores de manera directa o indirecta, generando en muchos casos lesiones temporales, permanentes e incluso la muerte.

Es muy probable que lo descrito en el párrafo anterior, fue lo que infortunadamente le pudo suceder a la trabajadora fallecida y, no se asegura, ya que todavía los hechos son materia de investigación ante las autoridades competentes, siendo significativo expresar que la señora ERMENCIA URBANO ORTEGA, al ingresar a PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S., jamás informó estar amenazada o que su vida corría peligro por actividades como lideresa en el campo social o como activista de derechos humanos; tan así es la cosa, que ni su esposo y menos sus hijos, se explican la causa de su muerte en condiciones violentas, porque la definen como una persona noble, de buenos principios, que no se metía con nadie, de hecho, era evangélica y promulgaba la palabra de Dios; expresiones tomadas del informe de entrevista psicológica – grupal, realizada a los demandantes por el Psicólogo DARIO FERNANDO PAREDES VILLOTA, folios cincuenta (50) a cincuenta y dos (52), de los anexos de la demanda.

Segundo - Accidente De Trabajo Objetivo: Con esto quiero reforzar lo sostenido en los párrafos precedentes, que lo sucedido a la señora

ERMENCIA URBANO ORTEGA, a partir de su desaparición el veintidós (22) de julio del dos mil diecinueve (2.019) y el hallazgo de su cuerpo sin vida el treinta (30) de julio del dos mil diecinueve (2.019), fue un típico accidente de trabajo objetivo.

Al respecto, cito un pequeño aparte de la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del diez (10) de julio del dos mil dos (2.002), Magistrado Ponente JOSÉ ROBERTO HERRERA VERGARA, dentro del expediente con radicación nro. 18323, así:

*JURISPRUDENCIA. — **No todo hecho imprevisto comporta culpa del empleador.** "La circunstancia de que en el informe patronal la accionada consignara que las causas del accidente fueron "imprevistas", no tiene la connotación que pretende derivar el censor en el sentido de que esa aislada expresión comporte una aceptación de su negligencia porque apreciada la probanza en un sentido lógico y contextual lo que pregona es que a pesar de las medidas "necesarias" adoptadas por la empleadora para evitar esos hechos fatídicos, el acaecido no era previsible y por tanto escapaba razonablemente de su responsabilidad.*

No sobra precisar que es cierto que la imprevisión por negligencia puede generar responsabilidad, pero no siempre lo imprevisto por un sujeto de obligaciones comporta necesariamente su culpa o actuación descuidada, con mucha frecuencia los hechos que suceden por no haber sido previstos o por no haberse contado con ellos, obedecen al azar y encuadran dentro de la definición clásica del simple accidente objetivo."

Tercero – Ausencia De Responsabilidad Subjetiva Del Empleador En la Ocurrencia Del Accidente De Trabajo: Este tópico la parte demandante al tratarlo, exclusivamente dirige sus esfuerzos al reprochar que la señora ERMENCIA URBANO ORTEGA, fue víctima del nefasto accidente de trabajo del treinta (30) de julio del dos mil diecinueve (2.019), por la negligencia o descuido del empleador PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S., al no diseñar e implementar el protocolo de seguridad para riesgo público. Igualmente, sin soporte jurídico y fáctico afirma que el lugar donde se encuentra ubicada la finca Araki, donde desapareció la trabajadora, es zona roja y no cuenta con esquemas de seguridad que garanticen la vida e integridad de sus trabajadores.

Todo lo anterior resulta ser falso, a la luz de la respuesta dada a los hechos vigésimo primero (21) y vigésimo segundo (22), los que retomo ahora:

Al ingresar a la empresa la señora ERMENCIA URBANO ORTEGA, recibió inducción sobre:

- 1) Temas varios como:
 - Información de la organización.
 - Plan de comunicaciones.
 - Derechos y beneficios adquiridos.
 - Responsabilidades en el reglamento interno de trabajo.
 - Responsabilidades específicas en el cargo.
 - Protocolo en el manejo de búfalos.
 - Manejo adecuado del dispositivo CTR.
- 2) Temas en seguridad y salud en el trabajo como:
 - Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

- Reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Política de seguridad y salud en el trabajo y seguridad integral.
- Política de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas.
- Política de seguridad vial y fluvial.
- Política de protección contra caídas.
- Acoso laboral.
- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.
- Subprograma de medicina preventiva e higiene y seguridad industrial.
- Matriz de identificación de peligros.
- Reporte de accidentes, incidentes de trabajo y condiciones inseguras.
- Elementos de protección personal.
- Plan de emergencia.
- Gestión ambiental.
- Normas RSPO.

De lo anterior, existe la firma del recibo de la inducción por parte de la trabajadora en cada uno de estos temas, que son de implementación obligatoria para el empleador y que, en su desarrollo, cubren muchos aspectos del riesgo público, reclamados por los actores.

Igualmente, redunda en seguridad lo siguiente:

- 1) La finca Araki es de aproximadamente 243 hectáreas, no toda está cultivada de palma de aceite, que cuenta con seguridad privada en la portería.
- 2) Por el frente que da hacia la vía nacional Tumaco – Pasto, está totalmente cercada con mallas y alambres de púa, en la parte posterior el cercamiento en sus hitos es con árboles de la región, ya que no se puede hacer de otra forma por las servidumbres de tránsito de colonos y pequeños palmeros.
- 3) Cuenta con dos (2) supervisores, el de cosecha y polinización.
- 4) La malla vial de acceso a los distintos lotes se encuentra en buen estado, siendo seguros para la movilidad.
- 5) Los terrenos de los lotes en su mayoría son llanos, con una que otra pequeña pendiente, pero que no representan mayores riesgos para los trabajadores.
- 6) Otro dato que no es menor y que redunda para la seguridad de la zona, es que a escasos cuatro (4) kilómetros se encuentra el Batallón de Selva # 53 Gualtal – Tumaco del Ejército Nacional.

Descrito lo anterior, se manifiesta que no les asiste razón a los demandantes, porque en PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S., empresa que tiene desarrollo en la región desde la década de los setenta, nunca antes se había presentado interna o externamente a la sede de la compañía, un infortunado suceso violento en contra de la vida de alguno de sus trabajadores, ni siquiera en las épocas de mayor incidencia de alteración del orden público por el narcotráfico y guerrilla en los fallidos procesos de paz del Caguan y en el del Gobierno Santos.

Para ilustrar mejor, sobre el tema del hecho determinante en la ocurrencia de un accidente de trabajo con exoneración de culpa en responsabilidad subjetiva del empleador, me apoyo en un pequeño aparte de la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del tres (3) de mayo del dos mil seis (2.006), Magistrado Ponente FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ, dentro del expediente con radicación nro. 26126, que transcribo literalmente así:

"CONSIDERACIONES DE LA CORTE

En síntesis, el fundamento de la decisión de segundo grado estribó en que no estaba demostrada en el proceso, la relación de causalidad entre las omisiones imputadas a la empleadora y el accidente de trabajo en que perdió la vida el trabajador Jhon Triviño Vargas, pues consideró el Tribunal que, aunque "...tales ausencias operativas para el desarrollo de la actividad ejecutada por la demandada desdichan de una adecuada prestación del servicio, pero que las mismas sean consideradas como factores concluyentes de una culpa patronal, existe una gran distancia que no logró ser superada en este proceso con las pruebas que fueron arrimadas.". Razón por la cual estimó que, así la empresa hubiera contado con un comité paritario de salud ocupacional, un programa de salud ocupacional, un panorama de riesgos, con cronograma de actividades, si hubiera verificado los procesos de selección y capacitación del personal con evaluaciones físicas y psicológicas, si hubiera dotado a sus empleados de chalecos antibalas, equipos de comunicaciones y vehículos, y hubiere contado con la presencia de personal de supervisión de turnos, de todas maneras no se hubiera podido evitar la muerte de su trabajador.

Respecto al comité paritario de salud ocupacional, con su programa de salud ocupacional, el panorama de riesgos y cronograma de actividades, señaló el ad quem que no hubieran podido evitar el accidente, porque se desconocían las causas que motivaron el accidente, de donde resultaba "...difícil concluir que por no haber tenido la presencia de los elementos configurantes del programa de salud ocupacional, se habría podido dar otro giro al inesperado acto de violencia producido en contra de Jhon Triviño, pues así se hubiese contado con ellos ¿Cómo afirmar que se habría precavido ese suceso?".

En conclusión, adecuado a nuestro caso también habría que preguntarse lo mismo ¿Cómo evitar que la trabajadora falleciera en un hecho de riesgo público violento no laboral, del qué no se conoce sus razones y que escapa a la órbita de competencia del empleador?

Cuarto – No basta con Probar el Accidente de Trabajo, También la Culpa del Empleador: El enunciado del título es claro, que para la indemnización total y ordinaria del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, se debe probar la culpa del empleador en la falta de cuidado y diligencia que los hombres emplean normalmente en sus negocios propios. Para este instante, traigo a colación un pequeño aparte de la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del diez (10) de abril de mil novecientos setenta y cinco (1.975), así:

*JURISPRUDENCIA. — **Accidente de trabajo. La culpa patronal debe probarla el trabajador.** "Las indemnizaciones prefijadas que consagra el Código Sustantivo del Trabajo para los perjuicios provenientes del accidente de trabajo, tienen fundamento en el riesgo creado, no provienen de la culpa sino de la responsabilidad objetiva. Pero la indemnización total y ordinaria prevista en el artículo 216 de dicha obra, exige la demostración de la culpa patronal, que se establece cuando los hechos muestran que faltó "aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios", según la*

definición de culpa leve que corresponde a los contratos celebrados en beneficio de ambas partes.

Para reclamar la indemnización prefijada le basta al trabajador demostrar el accidente y su consecuencia. Cuando se reclama la indemnización ordinaria debe el trabajador demostrar la culpa del patrono, y éste estará exento de responsabilidad si demuestra que tuvo la diligencia y cuidado requeridos.”.

Con base en el precedente aparte jurisprudencial, para condenar al empleador a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, sobre la base de lo consagrado en el artículo 216 del CST, debe existir culpa suficiente comprobada; nótese que la norma utiliza el adjetivo **“SUFICIENTE”**, para significar que sea bastante para lo que se necesita; es decir, que en el debate probatorio procesal no bastará con llegar a las meras especulaciones, suposiciones, cálculos o indicios, la culpa del empleador debe aparecer clara, evidente y con certeza, que de surgir la duda razonable, esta se resolverá con la absolución del empleador, teniendo siempre la carga procesal probatoria el demandante.

Es significativo anotar, que el artículo 216 del CST traslada esa responsabilidad y la contextualiza a la culpa patronal, constituyéndose como eximentes de responsabilidad la fuerza mayor o el caso fortuito, el hecho de un tercero y la culpa exclusiva de la víctima, elementos que rompen con las exigencias para constituir la culpa patronal, ya sea por el rompimiento del nexo causal (hecho de un tercero que se encuentra fuera de la órbita contractual), por la ocurrencia de un hecho externo, imprevisto e irresistible (fuerza mayor o caso fortuito) y por la culpa exclusiva del trabajador.

Las causales eximentes de responsabilidad se constituyen en herramienta de defensa de quien se pretende el resarcimiento por el daño causado por un accidente de trabajo, es la búsqueda de obstaculizar procesalmente se le impute la responsabilidad y se le obligue a responder por el daño, ya que, aunque el daño se materializó, los elementos generadores de este no revisten la entidad suficiente para concretar la culpa del demandado.

EXCEPCIONES DE FONDO

PRIMERA - PRESCRIPCIÓN: Contra todo derecho o acción a favor de los actores y a cargo de mi mandante, en razón a que los demandantes, si los tuvieron, no los ejercieron dentro de los términos expresos previstos en la Ley.

SEGUNDA - INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN: Se fundamenta en razones que se demostrarán en el curso del proceso y son las siguientes:

- 1) El nefasto accidente de trabajo sufrido por la señora ERMENCIA URBANO ORTEGA, el treinta (30) de julio del dos mil diecinueve (2.019), no es un hecho generado por la negligencia o culpabilidad del empleador, obedeció a circunstancias propias del riesgo público no creado por el desarrollo de la labor; es decir, un verdadero accidente objetivo.

- 2) El accidente de trabajo objetivo, oportunamente fue reportado por el empleador a la ARL POSITIVA, tan pronto se halló el cuerpo sin vida de la trabajadora, entidad a la cual se encontraba afiliada la trabajadora fallecida y es la que debe responder por todas las prestaciones económicas a sus beneficiarios.

TERCERA – RIESGO PÚBLICO FUERA DE LA ÓRBITA DE COMPETENCIA DEL EMPLEADOR: En primer lugar, debo precisar que toda actividad laboral está expuesta a un riesgo inherente y el accidente puede ocurrir por circunstancias propias de la actividad laboral y por causas ajenas al trabajador o al empleador.

Este tipo de riesgo laboral lo paga la ARL pues su papel precisamente es asegurar los riesgos propios de la actividad laboral, que ocurren por la propia naturaleza del trabajo desarrollado por el empleado.

Como lo alegado por los demandantes, es lo que se conoce como “Riesgo Público”, vale la pena sostener que en los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que deben implementar los empleadores, del cual el de PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S. no es la excepción, se tocan muchos aspectos de este tema (reglamento de higiene y seguridad industrial, política de seguridad y salud en el trabajo, seguridad vial y fluvial, política de protección contra caídas, acoso laboral, etc., etc.), porque a la final todo riesgo laboral es público, más no todo riesgo público es laboral.

Por riesgo público podría tenerse en cuenta una definición muy general como “todo lo que ocurre en los espacios públicos, exterior a las empresas, y que afecta la salud de las personas” (González Mendigaña, 2.017).

También se podría adoptar la definición del artículo 3º, numeral 15 del Decreto 4912 del 2.011 (por el cual se organiza el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección), en el que el riesgo es la “Probabilidad de ocurrencia de un daño al que se encuentra expuesta una persona, un grupo o una comunidad, como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón al ejercicio de su cargo, en unas condiciones determinadas de modo, tiempo y lugar”.

La definición cultural más común sobre riesgo público que uno se encuentra, refiere todo lo que ocurre en los espacios públicos, exterior a las empresas y que afecte la salud de las personas.

Pero, esta es una definición muy ambigua que involucra una gran cantidad de factores no controlables y que complica los programas de salud ocupacional, a la hora de definir políticas y diseñar estrategias de prevención. Además, los factores reales de riesgo público se encuentran con mayor frecuencia y con más alta probabilidad dentro de las instalaciones de las empresas y obedecen al giro propio de sus procesos productivos.

Siendo la conducta humana la principal característica en este tipo de factores de riesgo, es necesario analizar la intencionalidad de las conductas cuyo

propósito sea la de causar daño y/o generar lesiones y para eso se debe entrar en los terrenos de la criminalidad, la psicología delincinencial y otras disciplinas, que escapan al Derecho Laboral y la Seguridad Social.

Como estos factores operan en el espacio público, el principal responsable de la protección de las personas es el Estado y lo que se hace desde la esfera organizacional o personal son acciones de prevención y autoprotección. El riesgo público está asociado a los factores derivados de circunstancias sociales, que generan situaciones de agresión intencional de personas contra personas y/o contra comunidades. Lo anterior se manifiesta en actos generalmente delictivos que afectan sus intereses y en los que se ven involucrados trabajadores de manera directa o indirecta, generando en muchos casos lesiones temporales, permanentes e incluso la muerte.

Es muy probable que lo descrito en el párrafo anterior, fue lo que infortunadamente le pudo suceder a la trabajadora fallecida y, no se asegura, ya que todavía los hechos son materia de investigación ante las autoridades competentes, siendo significativo expresar que la señora ERMENCIA URBANO ORTEGA, al ingresar a PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S., jamás informó estar amenazada o que su vida corría peligro por actividades como lideresa en el campo social o como activista de derechos humanos; tan así es la cosa, que ni su esposo y menos sus hijos, se explican la causa de su muerte en condiciones violentas, porque la definen como una persona noble, de buenos principios, que no se metía con nadie, de hecho, era evangélica y promulgaba la palabra de Dios; expresiones tomadas del informe de entrevista psicológica – grupal, realizada a los demandantes por el Psicólogo DARIO FERNANDO PAREDES VILLOTA, folios cincuenta (50) a cincuenta y dos (52), de los anexos de la demanda.

CUARTA - AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA DEL EMPLEADOR EN LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE DE TRABAJO: Este tópico la parte demandante al tratarlo, exclusivamente dirige sus esfuerzos al reprochar que la señora ERMENCIA URBANO ORTEGA, fue víctima del nefasto accidente de trabajo del treinta (30) de julio del dos mil diecinueve (2.019), por la negligencia o descuido del empleador PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S., al no diseñar e implementar el protocolo de seguridad para riesgo público. Igualmente, sin soporte jurídico y fáctico afirma que el lugar donde se encuentra ubicada la finca Araki, donde desapareció la trabajadora, es zona roja y no cuenta con esquemas de seguridad que garanticen la vida e integridad de sus trabajadores.

Todo lo anterior resulta ser falso, a la luz de la respuesta dada a los hechos vigésimo primero (21) y vigésimo segundo (22), los que reitero ahora:

Al ingresar a la empresa la señora ERMENCIA URBANO ORTEGA, recibió inducción sobre:

- 1) Temas varios como:
 - Información de la organización.
 - Plan de comunicaciones.
 - Derechos y beneficios adquiridos.
 - Responsabilidades en el reglamento interno de trabajo.

- Responsabilidades específicas en el cargo.
 - Protocolo en el manejo de búfalos.
 - Manejo adecuado del dispositivo CTR.
- 2) Temas en seguridad y salud en el trabajo como:
- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
 - Reglamento de higiene y seguridad industrial.
 - Política de seguridad y salud en el trabajo y seguridad integral.
 - Política de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas.
 - Política de seguridad vial y fluvial.
 - Política de protección contra caídas.
 - Acoso laboral.
 - Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.
 - Subprograma de medicina preventiva e higiene y seguridad industrial.
 - Matriz de identificación de peligros.
 - Reporte de accidentes, incidentes de trabajo y condiciones inseguras.
 - Elementos de protección personal.
 - Plan de emergencia.
 - Gestión ambiental.
 - Normas RSPO.

De lo anterior, existe la firma del recibo de la inducción por parte de la trabajadora en cada uno de estos temas, que son de implementación obligatoria para el empleador y que, en su desarrollo, cubren muchos aspectos del riesgo público, reclamados por los actores.

Igualmente, redunda en seguridad lo siguiente:

- 1) La finca Araki es de aproximadamente 243 hectáreas, no toda está cultivada de palma de aceite, que cuenta con seguridad privada en la portería.
- 2) Por el frente que da hacia la vía nacional Tumaco – Pasto, está totalmente cercada con mallas y alambres de púa, en la parte posterior el cercamiento en sus hitos es con árboles de la región, ya que no se puede hacer de otra forma por las servidumbres de tránsito de colonos y pequeños palmeros.
- 3) Cuenta con dos (2) supervisores, el de cosecha y polinización.
- 4) La malla vial de acceso a los distintos lotes se encuentra en buen estado, siendo seguros para la movilidad.
- 5) Los terrenos de los lotes en su mayoría son llanos, con una que otra pequeña pendiente, pero que no representan mayores riesgos para los trabajadores.
- 6) Otro dato que no es menor y que redunda para la seguridad de la zona, es que a escasos cuatro (4) kilómetros se encuentra el Batallón de Selva # 53 Gualtal – Tumaco del Ejército Nacional.

Descrito lo anterior, se manifiesta que no les asiste razón a los demandantes, porque en PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S., empresa que tiene desarrollo en la región desde la década de los setenta, nunca antes se había presentado interna o externamente a la sede de la compañía, un infortunado suceso violento en contra de la vida de alguno de sus trabajadores, ni siquiera en las

épocas de mayor incidencia de alteración del orden público por el narcotráfico y guerrilla en los fallidos procesos de paz del Caguan y en el del Gobierno Santos.

Para ilustrar mejor, sobre el tema del hecho determinante en la ocurrencia de un accidente de trabajo con exoneración de culpa en responsabilidad subjetiva del empleador, me apoyo en un pequeño aparte de la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del tres (3) de mayo del dos mil seis (2.006), Magistrado Ponente FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ, dentro del expediente con radicación nro. 26126, que transcribo literalmente así:

"CONSIDERACIONES DE LA CORTE

En síntesis, el fundamento de la decisión de segundo grado estribó en que no estaba demostrada en el proceso, la relación de causalidad entre las omisiones imputadas a la empleadora y el accidente de trabajo en que perdió la vida el trabajador Jhon Triviño Vargas, pues consideró el Tribunal que, aunque "...tales ausencias operativas para el desarrollo de la actividad ejecutada por la demandada desdican de una adecuada prestación del servicio, pero que las mismas sean consideradas como factores concluyentes de una culpa patronal, existe una gran distancia que no logró ser superada en este proceso con las pruebas que fueron arrimadas.". Razón por la cual estimó que, así la empresa hubiera contado con un comité paritario de salud ocupacional, un programa de salud ocupacional, un panorama de riesgos, con cronograma de actividades, si hubiera verificado los procesos de selección y capacitación del personal con evaluaciones físicas y psicológicas, si hubiera dotado a sus empleados de chalecos antibalas, equipos de comunicaciones y vehículos, y hubiere contado con la presencia de personal de supervisión de turnos, de todas maneras no se hubiera podido evitar la muerte de su trabajador.

Respecto al comité paritario de salud ocupacional, con su programa de salud ocupacional, el panorama de riesgos y cronograma de actividades, señaló el ad quem que no hubieran podido evitar el accidente, porque se desconocían las causas que motivaron el accidente, de donde resultaba "...difícil concluir que por no haber tenido la presencia de los elementos configurantes del programa de salud ocupacional, se habría podido dar otro giro al inesperado acto de violencia producido en contra de Jhon Triviño, pues así se hubiese contado con ellos ¿Cómo afirmar que se habría precavido ese suceso?".

En conclusión, adecuado a nuestro caso también habría que preguntarse lo mismo ¿Cómo evitar que la trabajadora falleciera en un hecho de riesgo público violento no laboral, del qué no se conoce sus razones y que escapa a la órbita de competencia del empleador?

QUINTA – TÍPICO ACCIDENTE DE TRABAJO OBJETIVO POR RIESGO PÚBLICO: Con esto quiero reforzar lo sostenido en los párrafos precedentes, que lo sucedido a la señora ERMENCIA URBANO ORTEGA, a partir de su desaparición el veintidós (22) de julio del dos mil diecinueve (2.019) y el hallazgo de su cuerpo sin vida el treinta (30) de julio del dos mil diecinueve (2.019), fue un típico accidente de trabajo objetivo.

Al respecto, cito un pequeño aparte de la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del diez (10) de julio del dos mil dos (2.002), Magistrado Ponente JOSÉ ROBERTO HERRERA VERGARA, dentro del expediente con radicación nro. 18323, así:

*JURISPRUDENCIA. — **No todo hecho imprevisto comporta culpa del empleador.** "La circunstancia de que en el informe patronal la accionada consignara que las causas del accidente fueron "imprevistas", no tiene la connotación que pretende derivar el censor en el sentido de que esa aislada expresión comporte una aceptación de su negligencia porque apreciada la probanza en un sentido lógico y contextual lo que pregona es que a pesar de las medidas "necesarias" adoptadas por la empleadora para evitar esos hechos fatídicos, el acaecido no era previsible y por tanto escapaba razonablemente de su responsabilidad.*

No sobra precisar que es cierto que la imprevisión por negligencia puede generar responsabilidad, pero no siempre lo imprevisto por un sujeto de obligaciones comporta necesariamente su culpa o actuación descuidada, con mucha frecuencia los hechos que suceden por no haber sido previstos o por no haberse contado con ellos, obedecen al azar y encuadran dentro de la definición clásica del simple accidente objetivo."

SEXTA – AUSENCIA DE PRUEBA DE LA CULPA DEL EMPLEADOR: El enunciado del título es claro, que para la indemnización total y ordinaria del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, se debe probar la culpa del empleador en la falta de cuidado y diligencia que los hombres emplean normalmente en sus negocios propios. Para este instante, traigo a colación un pequeño aparte de la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del diez (10) de abril de mil novecientos setenta y cinco (1.975), así:

*JURISPRUDENCIA. — **Accidente de trabajo. La culpa patronal debe probarla el trabajador.** "Las indemnizaciones prefijadas que consagra el Código Sustantivo del Trabajo para los perjuicios provenientes del accidente de trabajo, tienen fundamento en el riesgo creado, no provienen de la culpa sino de la responsabilidad objetiva. Pero la indemnización total y ordinaria prevista en el artículo 216 de dicha obra, exige la demostración de la culpa patronal, que se establece cuando los hechos muestran que faltó "aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios", según la definición de culpa leve que corresponde a los contratos celebrados en beneficio de ambas partes.*

Para reclamar la indemnización prefijada le basta al trabajador demostrar el accidente y su consecuencia. Cuando se reclama la indemnización ordinaria debe el trabajador demostrar la culpa del patrono, y éste estará exento de responsabilidad si demuestra que tuvo la diligencia y cuidado requeridos."

Con base en el precedente aparte jurisprudencial, para condenar al empleador a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, sobre la base de lo consagrado en el artículo 216 del CST, debe existir culpa suficiente comprobada; nótese que la norma utiliza el adjetivo **"SUFICIENTE"**, para significar que sea bastante para lo que se necesita; es decir, que en el debate probatorio procesal no bastará con llegar a las meras especulaciones, suposiciones, cálculos o indicios, la culpa del empleador debe aparecer clara, evidente y con certeza, que de surgir la duda razonable, esta se resolverá con la absolución del empleador, teniendo siempre la carga procesal probatoria el demandante.

Es significativo anotar, que el artículo 216 del CST traslada esa responsabilidad y la contextualiza a la culpa patronal, constituyéndose como eximentes de responsabilidad la fuerza mayor o el caso fortuito, el hecho de un tercero y la culpa exclusiva de la víctima, elementos que rompen con las exigencias para constituir la culpa patronal, ya sea por el rompimiento del

nexo causal (hecho de un tercero que se encuentra fuera de la órbita contractual), por la ocurrencia de un hecho externo, imprevisto e irresistible (fuerza mayor o caso fortuito) y por la culpa exclusiva del trabajador.

Las causales eximentes de responsabilidad se constituyen en herramienta de defensa de quien se pretende el resarcimiento por el daño causado por un accidente de trabajo, es la búsqueda de obstaculizar procesalmente se le impute la responsabilidad y se le obligue a responder por el daño, ya que, aunque el daño se materializó, los elementos generadores de este no revisten la entidad suficiente para concretar la culpa del demandado.

SÉPTIMA – COBRO DE LO NO DEBIDO: Tiene sustento esta excepción, en la razón que los actores pretenden el pago de obligaciones que no les adeuda mi poderdante.

OCTAVA - BUENA FE: Las acciones encaminadas por parte del empleador dentro de los parámetros de sus funciones, siempre han estado revestidos de buena fe y en ningún momento, se ha pretendido con su actuar a través de sus representantes, violentar o amenazar derechos constitucionales fundamentales de los demandantes. Se deja en claro, que se ha cumplido con las garantías mínimas que otorga la Ley laboral a cualquier trabajador en Colombia.

NOVENA - LA INNOMINADA: Para todos los hechos y circunstancias que resulten probadas en el desarrollo del proceso.

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

Por aplicación analógica consagrada en el artículo 145 del CPT, conforme con el artículo 64 del CGP, manifiesto al señor Juez Laboral del Circuito de Tumaco, que llamo en garantía a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., NIT 890.903.407 – 9, a quien para efectos de cualquier notificación, se le remite a la carrera 63 # 49A - 31, piso 1º, edificio Camacol, teléfono 6046463060 de Medellín, correo electrónico protecciondedatos@suramericana.com.co, aseguradora con la que PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S., tiene una póliza con cobertura patronal, que de resultar condenada en el asunto que nos ocupa, tiene que responder por las pretensiones de los actores derivadas del nefasto accidente de trabajo, apoyado en los siguientes:

HECHOS

- 1) La señora ERMENCIA URBANO ORTEGA, identificada con cédula de ciudadanía nro. 25.600.396 de Patía (El Bordo), fue vinculada a la empresa PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S., a través de un contrato a término fijo inferior a un año de cuatro (4) meses.
- 2) Las labores a desarrollar, oficios varios en campo.
- 3) Salario el mínimo legal mensual vigente.
- 4) Fecha de inicio once (11) de julio del dos mil dieciocho (2.018).

- 5) Como a todo trabajador, se le afilió al Sistema de Seguridad Social Integral, específicamente en riesgos laborales a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., a partir del diez (10) de julio del dos mil dieciocho (2.018).
- 6) PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S., como empleador de la señora ERMENCIA URBANO ORTEGA, siempre efectuó oportunamente el pago de los aportes patronales, para mantener protegida a su trabajadora.
- 7) La trabajadora ERMENCIA URBANO ORTEGA, el veintidós (22) de julio del dos mil diecinueve (2.019), ingresó al lote QA 15 de la finca Araki, propiedad del empleador, a realizar su labor de campo de polinización.
- 8) Todo iba normal hasta las 11:30 a.m., último reporte de supervisión de su jefe inmediata la señora LILIANA SOTELO.
- 9) Aproximadamente a las 2:00 p.m. del mismo día, su hijo EIDER ORTEGA URBANO, quien terminaba faena en el lote vecino QA 14, se dispone a buscar a su madre para ayudarle y terminar más temprano.
- 10) Su hijo al llegar al lote QA 15, solo encuentra las herramientas y no a su madre.
- 11) Inmediatamente procede a informar la desaparición de su madre a la supervisora LILIANA SOTELO, quien con algunos trabajadores inician labores de búsqueda, con resultados infructuosos.
- 12) Aproximadamente a las 3:30 p.m. del treinta (30) de julio del dos mil diecinueve (2.019), se informa al empleador el hallazgo del cuerpo sin vida de la trabajadora desaparecida.
- 13) El levantamiento del cuerpo se gestiona el treinta y uno (31) de julio del dos mil diecinueve (2.019), a eso de las 9:15 a.m., cerca de una cascada ubicada en la vereda "El Paraíso", en el Gualtal kilómetro 54 de la vía nacional Tumaco – Pasto, a media hora y fuera de la plantación de Araki, donde está el lote QA 15 de donde primeramente había desaparecido.
- 14) El nefasto accidente de trabajo, es oportunamente reportado a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. por el empleador PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S., el mismo día del levantamiento del cuerpo.
- 15) Pero a más de lo anterior, PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S. tomó una póliza con cobertura patronal, que le permite cubrir este tipo de contingencias en demandas jurídicas con sus trabajadores.

PRUEBAS

Para demostrar las excepciones propuestas solicito se decreten y practiquen las siguientes:

Interrogatorio de Parte: Citar a los actores, para que en forma personal conteste el cuestionario que les formularé conforme a derecho.

Testimoniales: Los que detallo a continuación:

- 1) LILIANA ROCÍO SOTELO ROSERO, cédula de ciudadanía nro. 27.126.140 de Tumaco, celular 312 3702704, a quien se le localiza en el corregimiento de Candelillas de Tumaco - Nariño.

- 2) JHON ELMER QUIÑONES CABEZAS, cédula de ciudadanía nro. 1.087.203.357, celular 322 8588229, a quien se le localiza en el corregimiento de Candelillas de Tumaco – Nariño.
- 3) JAVIER HERNANDO ARÉVALO MELO, cédula de ciudadanía nro. 98.400.625, celular 317 3677609, a quien se le localiza en la sede de PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S., vereda de Vuelta de Candelillas de Tumaco – Nariño.
- 4) ANGIE ZAMIRA GARCÍA, cédula de ciudadanía nro. 1.143.964.686 de Cali, a quien se le localiza en la sede de PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S., vereda de Vuelta de Candelillas de Tumaco – Nariño.

Para que bajo juramento declaren sobre los hechos de la demanda y la respuesta de la misma, contestando el interrogatorio que en su debida oportunidad les formularé.

Documentales: A más de los que se encuentran o reposan en el expediente aportados por los demandantes, los siguientes:

- a) Solicitados por los demandantes:
 - 1) Copia simple matriz de riesgos de todos los puestos de trabajo desempeñados por el trabajador, folios 1 y 2.
 - 2) Copia simple formato de inducción y reinducción, folios 3 y 4.
 - 3) Copia simple del furat diligenciado por el empleador, folio 5.
 - 4) Copia simple informe de investigación del accidente de trabajo efectuado por el empleador, folios 6 al 17.
- b) Aportados por la parte demandada:
 - 1) Copia simple hoja de vida, examen de ingreso, contrato de trabajo y afiliaciones a EPS, ARL, AFP y Caja de Compensación Familiar, folios 18 al 33.
 - 2) Copia simple certificados de actividad específica y de cargos y funciones de la trabajadora, folios 34 al 36.
 - 3) Copia simple listado de elementos de protección personal de la trabajadora, folio 37.
 - 4) Copia simple entrega de dotación y elementos de protección personal área de polinización firmada por la trabajadora desaparecida, folio 38.
 - 5) Copia simple charla reprogramación en áreas de polinización plan de trabajo, folios 39 al 43.
 - 6) Copia simple reunión extraordinaria e investigación accidente laboral ERMENCIA URBANO ORTEGA del COPASST, folio 44.
 - 7) Copia simple formato activación del mecanismo de búsqueda urgente por la Fiscalía General de la Nación, a raíz de la denuncia promovida por PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S., folios 45 al 49.
 - 8) Copia simple gastos y logística operativo de búsqueda por el empleador, folios 50 al 70.
 - 9) Copia simple certificado de defunción, folio 71.
 - 10) Copia simple informe pericial de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que determina como causa básica de muerte asfixia mecánica por ahogamiento, folios del 72 al 76.

- 11) Copia simple liquidación de prestaciones sociales de la trabajadora fallecida, folios 77 a 78.
- 12) Copia simple de la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de PALMEIRAS COLOMBIA S.A.S., folios 79 al 84.
- 13) Copia simple de las normas de seguridad para actividades de polinización, folios 85 y 86.
- 14) Copia simple del programa de capacitación de seguridad y salud en el trabajo, folios 87 al 97.
- 15) Copia simple del programa de riesgo público, folios 98 al 105.
- 16) Copia simple de matriz de peligros 2.018, folios 106 al 111.
- 17) Copia simple contrato de seguridad privada, folios 112 al 116.
- 18) Copia simple póliza con cobertura patronal de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., folios 117 al 125.
- 19) Poder, folios 126 y 127.

Inspección Judicial: A los lugares de los hechos, para verificar:

- 1) Lote QA 15 de la finca Araki en el kilómetro 50 de la vía nacional Tumaco – Pasto, donde primeramente desapareció la trabajadora el veintidós (22) de julio del dos mil diecinueve (2.019).
- 2) Cascada ubicada en la vereda “El Paraíso”, en el Gualtal kilómetro 54 de la vía nacional Tumaco – Pasto, a media hora y fuera de la plantación de Araki, donde fue hallado el cuerpo sin vida de la obrera.
- 3) Distancia del Batallón de Selva # 53 Gualtal – Tumaco del Ejército Nacional, del lote QA 15 de la finca Araki en el kilómetro 50 de la vía nacional Tumaco – Pasto y de la cascada ubicada en la vereda “El Paraíso”, en el Gualtal kilómetro 54 de la vía nacional Tumaco – Pasto.
- 4) Medidas de seguridad en la finca Araki en el kilómetro 50 de la vía nacional Tumaco – Pasto.
- 5) Todos los puntos que puedan interesar para el objeto del proceso.

COMPETENCIA Y CUANTÍA

La primera (1ª) es suya. La segunda (2ª) es ilusoria y por lo tanto, la objeto.

A LAS DISPOSICIONES DE DERECHO

No son aplicables al caso presente.

ANEXOS

Solo el poder conferido por mi mandante, porque el certificado de existencia y representación legal de Cámara de Comercio de Cali, ya es parte del expediente.

NOTIFICACIONES

A mi poderdante y al suscrito, en mi consultorio de Abogado ubicado en la Avenida de Los Estudiantes, Centro Comercial "Miramar", oficina 206, telefax 7 27 58 25, celular 315 580 3607 de Tumaco – Nariño, correo electrónico laoguerra2@yahoo.com.

Con respeto,



DIEGO LUIS ARTEAGA ORTIZ

C.C. 79.384.925 DE BOGOTÁ D.C.

T.P. 63.306 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Anexos: Los anunciados en ciento veintisiete (127) folios.